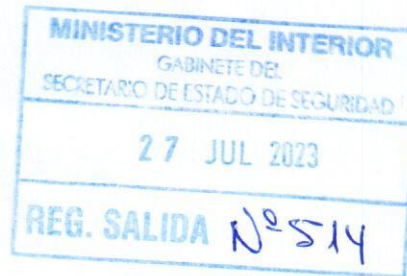




MINISTERIO
DEL INTERIOR



SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD

GABINETE

Vista la solicitud de acceso a la información pública con nº de expediente 001-078008 realizada por [REDACTED] titular del Documento Nacional de Identidad [REDACTED] formulada al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG), se informa lo siguiente:

En relación a la los puntos 1 a 10, en los Anexos I y II se facilita la información solicitada.

Respecto a los puntos 11 a 13, hay que tener en cuenta la normativa relativa a la protección de determinadas materias que, conforme a la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos oficiales, deben ser objeto de un acceso restringido y limitado al personal autorizado por afectar a la seguridad y defensa del Estado, lo que determina su clasificación como "Secreto" o "Reservado" en nomenclatura de la indicada ley, clasificación que compete al Consejo de Ministros.

En relación con ello, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, ampliado por Acuerdos de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, otorga el carácter de "Reservado" a aquella información relativa a "las plantillas de personal y medios y de equipo de las Unidades".

Por tal motivo, la difusión de la información relativa a los medios personales de las Unidades que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tiene protegiendo el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla perjudicaría, sin duda, la protección de los intereses de seguridad nacional y pública, así como los de prevención, investigación y persecución de ilícitos penales y administrativos, cometidos todos ellos, que vienen legalmente atribuidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Además, el facilitar dichos datos, podría dar información a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de seres humanos de cuáles son los procedimientos más idóneos para poder acceder a territorio español.

En consecuencia, y sobre la base de que se trata de información especialmente sensible y protegida por la Ley de Secretos Oficiales, se considera procedente denegar el acceso público a la información solicitada, al amparo de lo dispuesto en las letras a), d) y e) del artículo 14.1 de la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Finalmente, respecto a los puntos 14 a 17, teniendo en cuenta el período temporal al que se refiere la solicitud, y la no existencia de un registro informatizado de los distintos saltos llevados a cabo en los



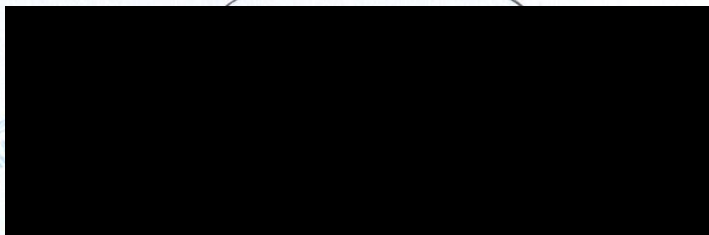
perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla, obtener la información solicitada con el detalle pretendido requeriría retraer tiempo y personal de otras actividades de las Unidades, por lo que se considera que las peticiones formuladas se encuentran incursas en la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al ser una solicitud que para su divulgación sería necesaria una acción previa de reelaboración.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse con carácter potestativo, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de UN MES, desde el día siguiente al de la fecha de notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 19/2013, en concordancia con lo establecido en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Una vez resuelta dicha reclamación, o de no hacer uso de la misma, podrá interponer, ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de DOS MESES, desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa de la reclamación o en que éste deba entenderse presuntamente desestimada, y en el caso de no hacer uso de la misma, desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 20.5 de la Ley 19/2013, y 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 04 de julio de 2023.

LA DIRECTORA DEL GABINETE



Ana María Prejigueiro Rodríguez

